



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0231/2017

FECHA: 07 de julio de 2017

02006 ALBACETE

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0231/2017 presentada por [REDACTED], en nombre y representación de [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito con registro de salida del Ayuntamiento de Ontur -Albacete- de 7 de abril de 2017, se comunica a [REDACTED] Escudero la Resolución de Alcaldía de 6 de abril de 2017. En la misma, tras aludir a una sentencia de 31 de julio de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Albacete en la que se condena al Ayuntamiento a abonar a la recurrente -funcionaria de dicha Corporación Local- una determinada cantidad por responsabilidad patrimonial del mismo, se acuerda en el apartado primero de su parte resolutive lo siguiente: *Incoar expediente administrativo en ejercicio de acción de regreso o repetición prevista en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, frente a [REDACTED], en la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, en resarcimiento por los perjuicios económicos irrogados a este ayuntamiento ocasionados como consecuencia de la comisión de posible acción dolosa, culpable o negligente con gravedad, que le puede ser imputable conforme a los antecedentes que se desprenden de la sentencia citada.*

ctbg@consejodetransparencia.es



En el oficio de traslado de dicha Resolución se indica, literalmente, lo siguiente: *Contra la presente resolución, puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente interponer reclamación administrativa ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta notificación de conformidad con los artículos 33.4 y 64 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha*

De acuerdo con ello, por escrito registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 28 de junio de 2017, ■■■■■■■■■■, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de ■■■■■■■■■■, interpone *reclamación administrativa ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha* frente a la precitada Resolución de 7 de abril de 2017 del Alcalde de Ontur.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de



Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. Con carácter preliminar este Consejo considera conveniente formular una observación general sobre su competencia para dictar reclamaciones derivadas de procedimientos de solicitudes de ejercicio del derecho de acceso a la información en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Según se ha tenido ocasión de reseñar en el Fundamento Jurídico anterior, el apartado 1 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que *la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.* En el caso de la Castilla-La Mancha, de acuerdo con los artículos 33.4 y 64 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se trata del denominado Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin perjuicio de ello, el apartado 4 de la Disposición adicional sexta de la misma Ley indica lo siguiente:

4. Las Cortes de Castilla-La Mancha, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adoptar las medidas precisas para la puesta en funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno I

A tenor de su Disposición final la Ley 4/2016 entró en vigor al mes de su publicación en el DOCM, que se produjo el 30 de diciembre de 2016. De manera que en la fecha en la que se dicta la presente Resolución, todavía no se ha hecho efectiva la previsión contenida en la norma Castellano-Manchega y, en consecuencia, no se ha constituido el Consejo Regional manteniendo su vigencia el Convenio suscrito entre este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4. Al margen de lo anterior, lo cierto es que la Reclamación interpuesta ha de inadmitirse por manifiesta falta de objeto. Tal y como se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por finalidad “*ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información*



relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública", en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma.

Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la "información pública" como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En último término, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, esto es, aquellos que versen sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

De acuerdo con los preceptos transcritos en los apartados precedentes, y teniendo en cuenta el objeto que fundamenta la pretensión de la presente Reclamación, cabe señalar que la misma queda evidentemente fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG. Tal y como se deduce de la reseña sumaria de los antecedentes de hecho reflejada más arriba, el acto recurrido ahora es una resolución de incoación de expediente administrativo en ejercicio de acción de regreso o repetición 'revista en el artículo 36.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, esto es, no hay una solicitud de acceso a la información pública, entendida ésta en los términos del artículo 13 de la LTAIBG, ni un acto expreso o presunto de la administración que deniegue el acceso a la información pública solicitada que accione la reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR A TRÁMITE** la Reclamación presentada, por entenderse que el objeto de la misma queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los



recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda